

POTASH, Robert: *El Ejército y la política en la Argentina. Tomo I (1928—1945) De Yrigoyen a Perón*. Traducción de Aníbal Leal, Buenos Aires, Sudamericana, 1971, 441 págs.

El Ejército y la política en la Argentina. Tomo II (1945—1962) De Perón a Frondizi, Traducción de Enrique Tejedor, Buenos Aires, Sudamericana, 1981, 553 págs.

En los últimos años, la historia política en la Argentina ha tenido un auge tan grande, que ha provocado la aparición de un sinnúmero de obras. Tal fenómeno ha manifestado una interesante predilección por los temas de historia argentina contemporánea, entendiéndose por ella los sucesos ocurridos en el país en los últimos cuarenta a cincuenta años.

Dentro de estas obras, cobran particular vigencia las destinadas a estudiar y analizar la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso histórico de la República.

La obra del profesor norteamericano Robert A. Potash ("El Ejército y la política en la Argentina"), abarca dos períodos claves del país: de 1928 a 1945 (de Yrigoyen a Perón), y de 1945 a 1962 (de Perón a Frondizi).

Estos dos libros constituyen un aporte inestimable para comprender el papel desempeñado por los militares en la historia política de la Nación.

* * *

El primer tomo de la obra de Potash analiza las presidencias de Hipólito Yrigoyen (1928—1930); José F. Uriburu (1930—1932); Agustín P. Justo (1932—1938); Roberto M. Ortiz (1938—1940); Ramón

S. Castillo (1940—1943); y por último, lo que el autor denomina “El Ejército en el poder”: el período que abarca los años 1943—1945, con las gestiones de los generales Arturo Rawson, Pedro P. Ramírez y Edelmiro J. Farrell.

Dentro de la etapa estudiada, se insertan las dos primeras revoluciones militares triunfantes del siglo XX: las del 6 de setiembre de 1930 y del 4 de junio de 1943.

Importante e interesante es el aporte de Potash referente a la política internacional desarrollada en el país a partir de la segunda guerra mundial, de esta manera se examina la neutralidad mantenida durante las presidencias de Ortiz y Castillo, como así también el nuevo cariz que tomaron los acontecimientos a partir de la toma del poder por parte de los militares.

La obra está estructurada en nueve capítulos y uno referente a las conclusiones; además de contar con su correspondiente aparato crítico y erudito: fuentes, bibliografía e índice alfabético de personas y lugares.

En el capítulo I (*La organización militar*), establece la diferencia entre el viejo ejército de fines del siglo XIX, y los nuevos cuadros militares creados a partir de 1901, con la sanción de la ley que estableció el servicio militar obligatorio.

Resalta la importancia que adquirió entre los medios castrenses la difusión de la influencia alemana, la cual “se acentuó aun más a causa de la práctica consistente en enviar oficiales seleccionados para seguir cursos suplementarios de entrenamiento en Alemania” (p. 19)

Las relaciones entre el presidente radical Hipólito Yrigoyen y los militares son analizadas en el capítulo II (*Yrigoyen y el Ejército, 1928—1930*), como así también las causas, desarrollo y consecuencias inmediatas de la revolución del 6 de setiembre de 1930.

Considera a Yrigoyen como la figura más carismática y popular de la Argentina antes de Perón, aunque estima que la reelección del caudillo radical interrumpió el programa inaugurado por el gobierno de Alvear en lo concerniente al mejoramiento de las instalaciones del ejército y el reequipamiento de modernos equipos.

Luego de analizar las líneas militares que prepararon el derrocamiento de Yrigoyen, define a la revolución del 6 de setiembre de la siguiente manera: “colocó al Ejército argentino en una posición de responsabilidad política franca. A diferencia de los intentos revolucionarios de 1890, 1893 y 1905, este movimiento tuvo éxito, y también a diferencia de los alzamientos anteriores, esta revolución fue dirigida

por un oficial de carrera dispuesto a asumir el liderazgo político del país". (p. 82)

Importante es la opinión del autor respecto a la posible intervención de intereses económicos extranjeros en los prolegómenos del estallido revolucionario. Sostiene que tanto la participación de la Standard Oil como la de una filial de un banco norteamericano carecen totalmente de validez, ya que "jamás se presentaron pruebas de ninguna clase de estas dos afirmaciones". (p. 85)

En el capítulo III (*El Ejército en el poder, 1930—1932*), se estudia la primera presidencia "de facto" del país: la gestión provisional del general José Félix Uriburu. Para Potash, este gobierno fue principalmente civil, lo que quedó demostrado en la formación de su gabinete, integrado en su mayoría por hombres del conservadorismo tradicional.

Al fracasar el plan político corporativista que Uriburu ofreció al país, no quedaba otra salida que el llamado a elecciones nacionales. Estas llevadas a cabo el 8 de noviembre de 1931, dieron el triunfo al binomio Justo—Roca, sostenido por la "Concordancia", con la abstención de los radicales. Dichas elecciones fueron "el puente que permitió a Argentina pasar de un prolongado período de gobierno de facto a lo que era, por lo menos, una apariencia de gobierno constitucional". (p. 114)

Al estudiar la gestión presidencial de Justo en el capítulo IV (*El General—Presidente*), el autor nos dice que "es indudable que (Justo) abrigaba las esperanzas de igualar las realizaciones constructivas del gobierno de Roca, y de contribuir, como su predecesor, a la organización de la Nación". (p. 121)

A su vez resalta, el hecho de que Justo, además de militar, era ingeniero civil, lo cual era muy importante; no solo por la ascendencia que tenía dentro de los cuadros militares, sino también por que en su gobierno se concretó la creación de una vastísima red nacional de caminos.

El historiador norteamericano destaca la figura del general Manuel Rodríguez, ministro de guerra y amigo y confidente del presidente. De él nos dice que "mientras vivió, Rodríguez fue la clave del control de Justo sobre el cuerpo de oficiales; pero también fue mucho más que asesor de asuntos militares". (p. 124)

Su inesperada muerte, acaecida en febrero de 1936, imposibilitó los deseos de Justo de elegirlo como su sucesor en el próximo período constitucional.

Las medidas económicas adoptadas en este período presidencial

merecen especial dedicación por parte del autor. Referente al pacto Roca—Runciman (1—V—1933), sostiene que “Argentina no tenía otros mercados para sus exportaciones de carnes y granos, de modo que no estaba en condiciones de negociar más eficazmente”. (p. 127)

Considera que la creación del Banco Central, en 1935, “fue una realización importante del gobierno de Justo, como lo reconocieron los gobiernos ulteriores, puesto que, después de reformar su estructura, lo utilizaron como instrumento fundamental de sus programas concretos”. (p. 129)

Con referencia a la “Corporación de Transportes de la ciudad de Buenos Aires”, indica que un juicio relativo a la misma recién podrá hacerse cuando se realice un estudio pormenorizado. Al respecto, debemos señalar que a fines de 1981, la profesora Martha Susana Páramo de Isleño aprobó su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en la especialidad Historia, precisamente con el tema en cuestión.

A pesar de la explicación de estas medidas económicas, Potash no señala cuáles fueron, en su momento, las críticas y las distintas oposiciones que despertaron en los diversos sectores de la opinión pública. No hay referencia a la obra desplegada por los núcleos nacionalistas y forjistas, los cuales consideraban, con justa razón, que toda la economía del país se había entregado al Reino Unido.

La obra presidencial del sucesor de Justo es analizada en el capítulo V (*La luz que se apagó*). Apoyada incondicionalmente por el propio gobierno y la “Concordancia”, la fórmula Ortiz—Castillo se impuso en comicios fraudulentos. El autor considera que la inclinación de Justo por Ortiz se debió a que “esperaba tener en él a un sucesor que continuaría su política económica, protegería el prestigio de su gobierno y allanaría el camino a una segunda presidencia del propio Justo”. (p. 156)

Sin embargo, el flamante presidente en sus primeros discursos, demostró que el fin de su política sería terminar con el fraude electoral y lograr la pureza de los comicios. Esta actitud de Ortiz es comparada por Potash con la asumida, en su momento, por Roque Sáenz Peña, el cual “había usado la autoridad derivada de una elección fraudulenta para garantizar la honestidad de las elecciones futuras”. (p. 158)

El nombramiento del general Gabriel Márquez como ministro de guerra, tuvo, por parte de Ortiz, el propósito fundamental de encontrar el hombre capaz de lograr el apoyo del ejército para cumplir con sus objetivos.

Al intervenir las provincias de Catamarca y Buenos Aires, el presidente dió pruebas concretas de su tan ansiada limpieza electoral. En palabras del autor: "por el momento el programa de reforma política de Ortiz había pasado la prueba y el ejército había demostrado su voluntad de apoyar a un gobierno comprometido con la restauración de las prácticas democráticas". (p. 171)

Empero, este proceso se vió interrumpido por dos factores: en 1940, la ofensiva alemana había eliminado a Francia de la contienda mundial; y el deterioro de la salud de Ortiz lo obligó a delegar sus funciones en el vicepresidente Castillo.

Respecto a la guerra, el mismo Ortiz había expresado, en uno de sus últimos mensajes al Congreso, la neutralidad argentina, pero ello no significaba una actitud de indiferencia o insensibilidad. Esta postura es juzgada por Potash como una continuación de las más puras tradiciones del país.

El 4 de julio de 1940, el vicepresidente Castillo se hizo cargo, interinamente, de la presidencia de la Nación. En realidad, Castillo fue, hasta 1942, vicepresidente a cargo del poder ejecutivo nacional, y no, como reiteradamente lo expresa Potash, presidente interino.

El alejamiento de Ortiz de la función pública, posibilitó la aparición de tres grupos de poder, encabezados por el ministro de guerra General Márquez; el general (R) Juan B. Molina; y el ex-presidente Agustín P. Justo, respectivamente. Luego de analizar las posibilidades de cada uno de ellos, el autor considera que "en suma, el general Justo se convertiría en el hombre fuerte, preparándose para asumir la presidencia una vez que Castillo hubiese completado el período legal". (p. 190-191)

En el capítulo VI (*El interludio de Castillo*), se explicita cual era la política a seguir por este catamarqueño de 67 años de edad. Sostiene el historiador norteamericano que "en el plano nacional (Castillo) procuró acrecentar su poder político y su prestigio; en el frente internacional se esforzó por mantener a toda costa la neutralidad argentina, aún después de la intervención de Estados Unidos en la guerra, y al mismo tiempo hizo todo lo posible para impedir que su país cayese en la órbita norteamericana". (p. 209)

Más adelante, y refiriéndose a la actitud asumida por Castillo ante la guerra, el autor robustece su opinión anterior, al decir que "el hecho de que el doctor Castillo lograra soportar la presión ejercida por los E. E. U. U. y otras naciones americanas en el problema fundamental de la ruptura de relaciones con el Eje, le permitió presentarse ante sus compatriotas como campeón de la soberanía argentina y defensor de la paz". (p. 240)

Así mismo, opina que a pesar de las divisiones ideológicas internas que sufría el ejército (aliadófilos, nacionalistas, apolíticos, etc), había algo en común en los militares argentinos: su constante preocupación por el reequipamiento y modernización de su armamento, en virtud de las fracasadas gestiones ante E. E. U. U. (misión Lapez—Sabá Sueyro) y Alemania.

Las muertes de Alvear y Ortiz en 1942, la de Justo en enero de 1943, produjeron el hecho de que “no quedaba ningún líder opositor de parecida envergadura nacional que rivalizase con el doctor Castillo; por consiguiente, la situación electoral se simplificó”. (p. 257)

El 3 de julio de 1942, el hasta entonces vicepresidente a cargo del poder ejecutivo nacional, asumió formalmente la presidencia de la Nación. Podía manejar ahora personalmente el nombre de quien sería su sucesor. La designación recayó en Robustiano Patrón Costas, líder del conservadorismo del interior; sería su compañero de fórmula un radical anti—personalista de Santa Fe, el ex—gobernador Manuel Iriondo.

En el capítulo VII (*El golpe militar del 3—4 de junio*), se analiza la revolución militar de 1943, que derrocó al presidente Castillo. Considera el autor que para comprender la naturaleza y oportunidad del movimiento del 4 de junio de 1943, es necesario examinar el papel cumplido por algunos militares y por el G. O. U., al cual se le atribuye la organización del golpe militar. No duda en identificar las siglas de esta logia como Grupo de Oficiales Unidos, a pesar de que estudios posteriores, como el realizado por el doctor Enrique Díaz Araujo, las ha interpretado como Grupo de Orden y Unificación.

Según Potash, la idea de la constitución del G. O. U. partió de los tenientes coroneles Miguel A. Montes y Urbano de la Vega, y del coronel Juan Domingo Perón, aunque reconoce que otros autores señalan que éste se incorporó cuando ya el grupo estaba en sus preparativos preliminares.

Constituido formalmente el 10 de marzo de 1943, indica al nombrado Perón y al teniente coronel Enrique P. González como los militares que nítidamente se destacan de la veintena de oficiales que formaron el G. O. U. A partir de mayo, la logia militar perfila un objetivo fundamental: frustrar la elección presidencial de Patrón Costas.

Luego de reseñar los entretelones de la conspiración militar, como así también la aceptación del general Arturo Rawson para encabezarla, el autor señala que “el movimiento del 4 de junio no fue el resultado de un plan cuidadosamente elaborado por el G. O. U., o siquiera por cualquier otro grupo de oficiales”. Descarta toda participación de los Estados Unidos o de la embajada alemana en la revolución

juniana, para afirmar que "mas bien fue una rápida improvisación, cuyos participantes apenas concertaron acuerdos en relación con objetivos específicos, fuera del derrocamiento del presidente Castillo". (p. 277)

El capítulo VIII (*El Ejército en el poder, 1943—1944*), corresponde a las gestiones presidenciales de los dos primeros gobiernos militares que se alternaron en el poder: la de los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez.

Estima que la efímera presidencia de Rawson se debió a la poca experiencia política del jefe de la revolución. Al no aceptar el G. O. U. la nómina de sus colaboradores, este general de caballería renunció 48 hs. después de haber ocupado la primera magistratura, aunque no había alcanzado a jurar como presidente.

Su sucesor, el ex—ministro de guerra de Castillo, el general Pedro Pablo Ramírez, posibilitó que la logia militar ocupara cargos claves en el gabinete nacional, a fin de controlar el cumplimiento del proceso revolucionario.

La política internacional jugó un papel preponderante durante la presidencia de Ramírez. Acuciado por la imperiosa necesidad de la renovación del armamento, el canciller argentino envió una carta al Secretario de Estado norteamericano, Corder Hull. La misma es juzgada por Potash como "un desesperado alegato de los elementos proalidos encabezados por el almirante Storni en favor de la comprensión de los Estados Unidos, y de algunas concesiones que fortaleciesen la posición de aquellos frente a sus rivales nacionalistas y proalemanes". (p. 318)

En virtud del enérgico rechazo de Hull, el gobierno argentino intentó conseguir las armas en Alemania, montando para ello la famosa, y no menos peligrosa, misión Helmuth. De ella nos dice el historiador norteamericano: "sus mentores argentinos apenas comprendieron que al confiar una misión tan delicada a este hombre, ponían en funcionamiento una bomba de tiempo que explotaría tres meses después, desbaratando la política de neutralidad a la cual adherían, y destruyendo ulteriormente sus propias posiciones políticas". (p. 320)

En la política interna, no pasa desapercibido para el autor la obra desarrollada, desde octubre de 1943, por el coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. De su accionar opina lo siguiente: "Perón lograría crear paulatinamente un amplio núcleo de partidarios en las filas del movimiento obrero; al tratar los reclamos de éste como inquietudes legítimas del gobierno, confirió al trabajador común un nuevo sentimiento de dignidad". (p. 326)

El decreto del 26 de enero de 1944, por el cual el gobierno ar-

gentino rompió relaciones diplomáticas con el Eje, lo atribuye Potash a dos circunstancias: el apresamiento de Helmuth en Trinidad por el servicio británico; y el derrocamiento del gobierno de Peñaranda en Bolivia, en el cual, según el Departamento de Estado norteamericano, estuvieron implicados militares argentinos.

De los dos hechos apuntados, el autor se inclina por el primero de ellos. Como prueba fehaciente, reproduce un cable del ex—encargado alemán en Argentina, el cual dice: “he sabido de buena fuente, pero hasta aquí muy confidencialmente, que cuando se apresó a Helmuth en Trinidad se le encontró una carta que compromete mucho al general Ramírez, y que ese documento fue utilizado por Estados Unidos e Inglaterra para obtener la ruptura”. (p. 332)

La declaración rupturista por parte de Argentina, provocó una crisis interna, la cual culminó el 24 de febrero de 1944 con la disolución del G. O. U., a fin de no obstaculizar la marcha normal del gobierno.

Ramírez intentó desembarazarse de Farrell y Perón, pero los principales jefes militares permanecieron leales al ministro de guerra y a su secretario, con lo cual el presidente no tuvo otra salida que renunciar. En las páginas 338 y 339, Potash transcribe las dos renunciaciones de Ramírez; la primera, redactada por él, y la segunda, que se hizo pública, impuesta por Perón.

A modo de conclusión de la gestión presidencial de Ramírez, se señala que “de nuevo, pero ahora por última vez, este delgado oficial de caballería, a quién el destino había elevado a una posición que le permitía influir sobre el futuro de su país, demostró que el uniforme de soldado no es sustituto del valor político”. (p. 340)

El penúltimo capítulo, el IX, (*El triunfo de Perón*), estudia los acontecimientos desarrollados entre la asunción de Farrell y los sucesos del 17 de octubre de 1945, que marcó el camino de Perón hacia la presidencia de la Nación.

La llegada de Farrell al gobierno permitió, a juicio de Potash, “que Perón crease un clima de opinión y un aparato electoral que le permitió su propio dominio político”. (p. 341)

Prueba de ello, fueron los dos nuevos cargos ostentados por este coronel del arma de infantería: ministro de guerra y vicepresidente de la Nación.

El problema de la adquisición de nuevo y moderno armamento seguía vigente. Con una Alemania virtualmente derrotada, que no podía satisfacer los elementos requeridos, solo restaba lograr un acuerdo con los Estados Unidos. El autor asigna vital importancia a las relacio-

nes del gobierno de Farrell con el país del norte; las considera cruciales en los cambios políticos que se produjeron en el país a partir de 1945.

Prueba de ello fue la adhesión del gobierno militar argentino al Acta de Chapultepec; la declaración de guerra a Alemania y Japón; como así también la imposición de restricciones a empresas y ciudadanos del Eje. Estima Potash que "en definitiva, el oportunismo prevaleció sobre el orgullo nacionalista". (p. 364)

La presión norteamericana tomó nuevos bríos con la designación de Spruille Braden como embajador en la Argentina, ya que éste consideró que "el objetivo de su misión era la restauración del régimen constitucional y se alió francamente con las fuerzas de la oposición liberal que procuraban derrocar al régimen militar". (p. 369)

El 7 de julio de 1945, en la tradicional cena de las Fuerzas Armadas, Farrell anunció oficialmente la convocatoria a elecciones para fines de ese año, entregando el mando a aquella a quien el pueblo eligiese. Sin embargo, las expectativas que se desataron después de este anuncio, se diluyeron rápidamente, a raíz de que Perón, el candidato oficial, no había renunciado a los tres cargos que detentaba dentro del propio gobierno.

Este clima de oposición a la gestión gubernamental, y al propio Perón, culminó el 19 de setiembre, con la llamada "Marcha de la Constitución y la Libertad", la cual "estuvo mucho mejor organizada que las operaciones militares que debían complementarla". (p. 378)

Esta alusión hace referencia a la abortada conspiración del general Rawson, la cual no contó con el apoyo de la oficialidad de Campo de Mayo. El propio Potash considera que "era inevitable que la atmósfera de creciente tensión alcanzara a los círculos militares, y los oficiales reaccionaron celebrando reuniones espontáneas en las cuales se discutieron las posibles medidas". (p. 381)

La presión ejercida por el jefe de la citada guarnición, general Eduardo Avalos, logró sus frutos el 9 de octubre, cuando Perón presentó la renuncia a sus tres cargos. Refiere el autor que "la súbita deposición del coronel Perón, como culminación de varios meses de permanente tensión política, regocijó a sus enemigos y conmovió a sus amigos y partidarios". (p. 386)

Reseña Potash luego los días cruciales de este octubre de 1945, que culminaron el día 17 con el triunfo de Perón. Sin embargo, el propio Avalos podría haber torcido el rumbo de la historia si hubiese tomado medidas enérgicas hacia el movimiento obrero, y capitalizar a su favor el momento de escepticismo que vivió el país a raíz de la detención de Perón en Martín García.

Con referencia a la concentración popular en Plaza de Mayo, el historiador norteamericano indica que “el desafío al gobierno representado por este movimiento de masas fue esencialmente una prueba de la capacidad de juicio y de la decisión de un solo hombre. Quien debía adoptar las decisiones fundamentales no era ni el presidente Farrell ni el alto mando del Ejército, ni los jefes de la Marina, sino el general Eduardo Avalos”. (p. 395)

La experiencia negativa de Avalos en la revolución de junio de 1943 —se sentía responsable de setenta muertes a raíz del tiroteo frente a la Escuela Mecánica de la Armada—, pesó indudablemente en su determinación de evitar cualquier actitud que lo hiciese responsable de la pérdida de nuevas vidas.

Por ello, Potash afirma que “si esta interpretación es exacta, los hechos del 4 de junio de 1943 y del 17 de octubre de 1945 guardan una relación más estrecha de la que se cree generalmente, ya que si bien la revolución de junio abrió el camino al predominio político de Perón, desarmó psicológicamente al único oficial que disponía de poder suficiente para impedir que Perón conquistase un control total en octubre de 1945”. (p. 401)

El capítulo X (*Conclusión*), es una rápida evaluación de los hechos acaecidos en el país, a partir de la irrupción de los militares en el poder.

Este ciclo, iniciado el 6 de setiembre de 1930, se ha manifestado reiteradamente en nuestra historia argentina contemporánea. El hecho de que los civiles ~~comenzaran~~ a golpear las puertas de los cuarteles, demostró que “en la crisis de 1930, los partidos antiyrigoyenistas apelaron al Ejército para que resolviese mediante la fuerza un problema que ellos no habían podido solucionar utilizando medios constitucionales”. (p. 403)

Para Potash, lo positivo del gobierno provisional y “de facto” de Uriburu fue que demostró las limitaciones propias del régimen militar; la gestión de Justo, al carecer de legitimidad, debió apoyarse necesariamente en los militares.

Una tenue luz pareció asomarse con Ortiz, al intentar éste terminar con el fraude y la corrupción electoral. Sin embargo, su enfermedad y posterior muerte terminaron con las ilusiones de aquellos que vislumbraban la vuelta a las más puras prácticas republicanas.

La desesperación cundió nuevamente, y los militares fueron convencidos de que sólo ellos podían salvar al país. Al estallar la improvisada revolución de 1943, surgió la figura del coronel Perón, principal beneficiario de todo un proceso que culminó con su triunfo electoral del 24 de febrero de 1946.

Por último, el autor sostiene que “es muy dudoso que los oficiales militares que aceptaron las aspiraciones presidenciales de Perón, después de octubre de 1945, hayan previsto realmente el tipo de régimen que él crearía”. Sin embargo, el repliegue del Ejército a sus funciones específicas, no constituyó un obstáculo para que los militares se sintieran una fuerza política de reserva, “que tenía el derecho y el deber, cuando las circunstancias lo justificaran, de regresar al centro de la escena política”. (p. 407—408)

* * *

En su segundo Tomo sobre la política y los militares en la Argentina, el profesor Robert A. Potash estudia el período comprendido entre 1945 y 1962. En él se analizan las presidencias constitucionales de Juan Domingo Perón (1946—1952) (1952—1955); y de Arturo Frondizi (1958—1962); la gestión de los dos gobiernos de la Revolución Libertadora: la de los generales Eduardo Lonardi (setiembre a noviembre de 1955) y Pedro Eugenio Aramburu (1955—1958); como así también el derrocamiento de Frondizi, ocurrido el 29 de marzo de 1962.

En un breve prefacio, el autor indica que su trabajo de investigación es continuación de su primer estudio sobre el tema, que como ya sabemos, abarca el lapso 1928—1945. Señala como diferencia fundamental el surgimiento de la Marina como una nueva fuerza política, otorgando una nueva dimensión a la relación entre los civiles y los militares.

A partir de 1955, esta fuerza, al igual que la Aeronáutica, adquirieron mayor importancia, gravitando sobre las decisiones políticas del país, a tal punto que no deben perderse de vista sus correspondientes interacciones con el Ejército, que hasta ese momento había capitalizado en forma casi unánime el sentir de las Fuerzas Armadas de la Nación.

La obra está estructurada en diez capítulos, el último de ellos destinado a las conclusiones. Cuenta con aparato crítico y erudito: fuentes, bibliografía e índice alfabético de personas y lugares.

En el capítulo I (*La escena: después de octubre de 1945*), el autor reseña las consecuencias inmediatas del 17 de octubre; y resalta la importancia de la decisión fundamental del pueblo argentino: “la elección de un sucesor constitucional al régimen militar que había gobernado al país durante los dos años y medio anteriores”. (p. 14)

Así mismo, destaca la gravitación, luego de la segunda guerra mundial, de las dos fuerzas políticas más significativas: los militares y el sector obrero. Considera que “hacia fines de 1945, el movimiento obrero y las Fuerzas Armadas, así como el público argentino en general, siguieron con atención cada vez mayor la campaña electoral”. (p. 33).

El capítulo II (*Elección con garantías, 1945—1946*), analiza la lucha electoral, que culminó con el triunfo de Perón. Señala la intención del gobierno de Farrell de asegurar una elección honesta, lo que permitiría al Ejército volver a sus tareas profesionales con el honor intacto.

No pasa desapercibido para Potash la tarea realizada por el coronel Perón para lograr el apoyo del movimiento obrero. Esto se logró a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo de Domingo Mercante, amigo personal del candidato presidencial del Partido Laborista.

La oposición política se centralizó en la Unión Democrática, cuyo candidato presidencial, José Tamborini, "era un veterano del partido radical, que había cumplido varios mandatos como diputado desde 1918". (p. 50)

El ambiente electoral y proselitista, en vísperas de las elecciones de febrero de 1946, presentaba a una Argentina apasionadamente dividida. Señala el autor que "las diez semanas previas a la elección, sin embargo, fueron testigos de una serie de explosivas maniobras políticas, maquinaciones, acusaciones y contraacusaciones, algunas de ellas de origen externo, que sirvieron para elevar la temperatura política a nuevas alturas". (p. 59)

Indudablemente que la más importante de todas estas maniobras fue la publicación del famoso "Libro Azul", el 11 de febrero de 1946. Para Potash, "la intención principal del "Libro Azul" era documentar la protección dada al espionaje y a los intereses económicos nazis, la índole totalitaria del régimen de Farrell y la amenaza que representaba para los países vecinos". (p. 66)

Inspirado por Spruille Braden, un viejo conocido de la Argentina en el 45, su intención era terminar con el gobierno militar y la carrera política de Perón. Sin embargo, éste tomó la publicación de estas acusaciones como una oportunidad para demostrar la ingerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, capitalizando en beneficio propio sus efectos.

En efecto, este fue el origen de la disyuntiva histórica en las elecciones de 1946: Braden o Perón. Quien votara por la Unión Democrática, estaba votando en contra del país; el voto por Perón lo era por la defensa de la soberanía nacional y los intereses de la Nación.

Refiriéndose a la legitimidad de los comicios, el autor sostiene que las elecciones "fueron una de las más limpias, sino la más limpia de la historia argentina". (p. 73)

A modo de conclusión del capítulo reseñado, se señala, con gran acierto, que “a diferencia del papel desempeñado entre 1932 y 1943 como defensor de gobiernos esencialmente impopulares y minoritarios, el Ejército podía mirar hacia el futuro y vislumbrar para sí una función más holgada como protector de un gobierno constitucional debidamente elegido”. (p. 76)

Los capítulos III, IV, V y VI estudian las dos presidencias de Juan Domingo Peron, como así también la gestación y eclosión de la Revolución Libertadora, que derrocó al peronismo y catapultó nuevamente a los militares al poder político de la República.

Al iniciar el capítulo III (*La presidencia de Perón: consolidación, 1946—1948*), el historiador norteamericano destaca la importancia que tuvo para la Argentina la asunción presidencial de Perón, el 4 de junio de 1946. Así mismo, considera que se abrían para el país nuevas expectativas y esperanzas, luego de tres años de gobiernos militares.

Indica la enorme gravitación que tuvieron, en la dinámica interna de esta primera fase del gobierno, María Eva Duarte de Perón, esposa del líder, y Miguel Miranda, su principal asesor económico.

Respecto a la primera, considera que “transformó la influencia inicial inherente a su posición como esposa del presidente en un genuino poder político; se convirtió en el socio político de su marido, y no necesariamente un socio subordinado”. (p. 83)

Al referirse a Miguel Miranda, designado presidente del Banco Central, opina que “compartía las ideas de Perón en cuanto a la promoción de la independencia económica, y las mejoras en los niveles de vida, y era casi el único entre los empresarios que había apoyado a Perón durante la crisis política de 1945, y en la subsiguiente campaña electoral”. (p. 85)

Otro personaje al cual Potash asigna enorme trascendencia, es el general Humberto Sosa Molina, ministro de guerra. Compara su gestión a la tarea realizada por Manuel Rodríguez en la administración de Justo. Ambos, en su momento, reanimaron el sentido del profesionalismo castrense, luego de la intervención de los militares en la política.

Pasa luego a examinar las primeras medidas económicas, tales como la creación de los Planes Quinquenales y el I. A. P. I. (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), como así también la compra de los ferrocarriles británicos, en febrero de 1947, en 150 millones de libras esterlinas. Al respecto, considera que “esta decisión apaciguó inmediatamente el recelo nacionalista en los círculos partidarios

del gobierno, pero sus opositores políticos, como era de esperar, encontraron nuevo motivo de crítica en el precio, que denunciaron como exorbitante". (p. 102)

En el marco de las relaciones internacionales, la firma del Tratado de Río, en 1947, sintetizaba la idea de Perón acerca del papel que debía cumplir la Argentina en el contexto americano.

El capítulo IV (*Las primeras advertencias, 1949—1951*), está enmarcado en dos hechos de gran importancia: la reforma de la Constitución Nacional, y la frustrada revolución militar del general (R) Benjamín Menéndez.

Luego de reseñar los alcances de las reformas introducidas a la Carta Magna (derechos del trabajador, la ancianidad, otorgamiento del voto femenino, reelección presidencial, elección directa del binomio presidencial y senadores, etc), el autor hace hincapié en el controvertido artículo 40, del cual expresa: "se convirtió en un factor que obstaculizaba los esfuerzos argentinos para obtener la cooperación de los Estados Unidos ante el problema de la escasez de dólares y otras dificultades que afectaban las relaciones entre ambos países". (p. 146)

Pasa luego a examinar los móviles que determinaron la abortada revolución militar de 1951. Señala como causas desencadenantes la clausura del diario "La Prensa" y la campaña oficial para postular a Eva Perón a la vicepresidencia de la Nación.

Por qué fracasó el levantamiento militar? Potash no duda en afirmar que "la falta de coordinación y la rivalidad entre quienes aspiraban al mando, entorpecieron la acción desde el principio mismo". (p. 177)

Los oficiales que pretendían liderar la revolución eran los generales Eduardo Lonardi y Benjamín Menéndez, lo cual constituía natural confusión en los participantes. Al fracasar los intentos de conciliación por parte de ambos militares, Lonardi prefirió apartarse del complot revolucionario, asumiendo Menéndez, virtualmente, la conducción del movimiento.

Los revolucionarios consideraban imprescindible derrocar a Perón antes de que pudiera ser reelecto. El levantamiento se llevó a cabo el 28 de setiembre, pero el mismo "pecó por su planificación inadecuada y su ejecución deficiente". (p. 187)

La frustrada revolución militar de 1951 motivó una serie de cambios en la cúpula militar; una corte marcial sentenció al general Menéndez a quince años de prisión y ordenó su destitución como general del ejército argentino.

Para el autor, con estas medidas, Perón “tenía firme control de la institución militar, pero la duración de ese control dependería no solo de la vigilancia de sus servicios policiales y de espionaje, sino también de cómo ejercería los poderes de su cargo cuando fuera reelegido”. (p. 194)

El capítulo V (*Nuevos rumbos, 1951—1954*), comienza con la reseña del triunfo electoral de Perón en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Según Potash, “al votar en una proporción de dos a uno para que Perón continuara en el mando, el electorado sancionaba la transformación de su filosofía: la llamada doctrina peronista era ya una doctrina nacional”. (p. 197)

La muerte de Eva Perón, acaecida el 26 de julio de 1952, “provocó manifestaciones de dolor popular casi sin precedentes en la historia argentina; quizás la más cercana fuera la motivada por la muerte de Yrigoyen en 1933”. (p. 205)

Indudablemente, la desaparición de la esposa del presidente marcó el fin de una época en el gobierno peronista.

Aprovechando esta coyuntura, algunos militares presionaron a Perón para lograr el desplazamiento de algunos hombres, cuyos cargos se debían, en gran medida, a la decisiva influencia de su extinta mujer.

El caso más sonado de todos ellos, lo constituyó la renuncia del secretario privado del presidente, y a la vez su cuñado, Juan Duarte.

Investigado por un presunto negociado en la Casa Rosada, el citado Duarte “apareció muerto de un balazo a causa de un suicidio, como sostuvo la policía, o víctima de un atentado por parte de desconocidos”. (p. 208)

El autor sostiene que hasta hoy este hecho es tema de controversias. Cita al capitán de navío (R), Aldo Molinari, cuyo testimonio revela la creencia de que la muerte en cuestión se debió a un asesinato encubierto por la Policía Federal.

Otro hecho importante en este período, fue el triunfo de Alberto Tessaire, un marino retirado, en las elecciones para vicepresidente de la Nación, cargo que había quedado vacante por el fallecimiento de Hortensio Quijano, en abril de 1952.

Entre 1953 y 1954, Perón dió muestras de un acercamiento a los países americanos. Se firmaron acuerdos de amistad y unión económica con Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia. A pesar de ello, era necesaria una política internacional que atrajera capital extranjero para el desarrollo de las industrias básicas.

Según Potash, esto condujo a "la necesidad de estrechar relaciones con los Estados Unidos, perspectiva que el reciente reemplazo del demócrata Truman por el republicano Eisenhower hacía mutuamente atractiva". (p. 222)

Esto creó un dilema para el gobierno; esto es, como armonizar sus retóricas nacionalistas con la creación de nuevas expectativas que hicieran posible las condiciones y garantías para atraer la radicación de capitales foráneos. En palabras del autor: "la cambiante orientación económica del gobierno de Perón con la importancia que dió a una mayor participación del capital extranjero y del sector privado, tendría consecuencias de índole social y política, que se revelarían después de 1953". (p. 229)

El capítulo VI (*El fin de una era: la caída de Perón, 1954—1955*), analiza las causas y el estallido de la Revolución Libertadora, es decir, el derrocamiento del peronismo en 1955.

El historiador norteamericano, no duda en afirmar que uno de los motivos más directos para la consolidación de inquietudes revolucionarias, fue el conflicto mantenido entre el gobierno y la Iglesia Católica. Así mismo, hace notar que las cambiantes relaciones entre el clero y Perón han sido estudiadas exhaustivamente en el libro de Pedro Santos Martínez, "La Nueva Argentina" (1946—1955)

La adopción de una serie de medidas en contra de la Iglesia, motivó que la oposición de los partidos políticos al peronismo hiciera causa común con ella, logrando la creación de un clima muy especial.

A todo esto, las Fuerzas Armadas no permanecieron indiferentes al problema ya que "al hacerse evidente el continuo apoyo de Perón a las medidas anticlericales, su dominio sobre la lealtad de los oficiales del Ejército comenzó a debilitarse". (p. 245)

Otro factor importante, que contribuyó a aumentar aún más el ambiente político adverso al presidente, fue la suscripción de un contrato petrolero con la Standard Oil Company de California, lo que constituía una abierta violación al artículo 40 de la Constitución Justicialista, que prohibía la enajenación de las reservas petrolíferas.

Reconoce dos etapas claves en la caída de Perón: el levantamiento de la Marina, en junio de 1955; y el estallido de la Revolución Libertadora, en setiembre del mismo año.

El fracasado movimiento del 16 de junio, merece el siguiente juicio del autor: "produjo una oleada de estupor que barrió con todo el sistema político argentino y afectó al gobierno de Perón, la oposición y las Fuerzas Armadas". (p. 261)

El intento de lograr una pacificación de los espíritus, y una tre-

gua política fracasó. Las distintas medidas que se tomaron no hicieron más que avivar y reanimar las críticas hacia el régimen.

El 31 de agosto, Perón presentó su renuncia, pero no la elevó, como constitucionalmente corresponde al Congreso, sino al movimiento peronista. La C. G. T. ordenó una inmediata concentración en Plaza de Mayo para reiterar su apoyo incondicional al líder y solicitarle el retiro de su dimisión. Inusitadamente, Perón dió un giro a su política de pacificación, cuando al finalizar su discurso ante la multitud, expresó que "la consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos".

Al respecto, Potash expresa que "las palabras de Perón suscitaron profunda alarma entre sus opositores, a la vez que causaron una creciente preocupación en cuanto a su equilibrio mental, inclusive entre sus adictos". (p. 268)

Es de hacer notar, que las Fuerzas Armadas se sintieron profundamente preocupadas por el cariz que habían tomado los acontecimientos, renovándose los ímpetus de las conspiraciones en marcha.

Apoyado en los testimonios brindados por muchos militares participantes de la revolución de 1955, y en las memorias del capitán de navío Jorge Perrén, el autor reconstruye el proceso que llevó al estallido del 16 de setiembre.

Al igual que en la frustrada intentona de Menéndez de 1951, dos oficiales del Ejército se disputaron la jefatura de la revolución: los generales Pedro Eugenio Aramburu y Eduardo Lonardi.

Respecto del primero, sostiene que "temiendo otro fracaso como el del 16 de junio, y las lamentables consecuencias que podían esperarse del furor del presidente y de sus simpatizantes entre la clase trabajadora, suspendió su propia actividad de conspirador y aconsejó la postergación de la revolución para un momento más oportuno". (p. 272)

Entonces, Lonardi, que revistaba en carácter de general retirado, decidió asumir la conducción del complot revolucionario. Resolvió que el estallido debía lanzarse desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el 15 de setiembre a la medianoche.

La participación de la Marina se dió a través del contraalmirante Isaac F. Rojas, director de la Escuela Naval de Río Santiago, quién tomó bajo su cargo la responsabilidad del arma en la insurrección anti-peronista. Otros dos oficiales de la Armada, los capitanes de navío Arturo Rial y Jorge Perrén, actuaron como enlaces con Lonardi.

Potash compara la ambigüedad de los planes políticos de los revolucionarios de 1955, con los de 1943, y opina que "mientras el general Lonardi daba por sentado que, como jefe de una revolución triunfante asumiría la presidencia, los conspiradores navales ni siquiera reconocían en él al jefe absoluto de la revolución". (p. 276)

Ante la intimidación de Rojas, de cañonear las destilerías de La Plata y Dock Sud, Perón presentó su renuncia ante una Junta de Generales, la cual resolvió aceptarla, considerándose en plena libertad de acción para negociar con el comando revolucionario.

Las relaciones entre los rebeldes de la Marina y el general Lonardi quedaron solucionadas, cuando el propio Rojas decidió reconocer a éste último, sin consultar a los demás marinos, como jefe de la revolución y presidente provisional de la Nación. Una vez tomada la decisión, "se la aceptó lealmente; la disciplina naval, aún entre los revolucionarios, permanecía inalterable". (p. 286)

El 23 de setiembre de 1955, en medio de un júbilo desbordante, Eduardo Lonardi arribó a Buenos Aires, asumiendo, provisionalmente, la primera magistratura.

En el capítulo VII (*Los Militares en el poder: la Revolución Libertadora, 1955-1958*), se estudian las presidencias de los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, cuya gestión culminó en 1958, con el llamado a elecciones y el triunfo de Arturo Frondizi.

Para Potash, "el derrocamiento de Perón, en setiembre de 1955, señaló el retorno de la Argentina a un control militar directo, después de nueve años de gobierno semilegal". (p. 292)

La efímera presidencia del jefe de la revolución, estuvo condicionada por los interrogantes que se abrieron en el país después de la caída del peronismo. Esto es lo que el autor denomina la herencia de Perón: el apoyo de las masas, las instituciones, las políticas puestas en vigor durante la última década, el partido justicialista, la C. G. T., etc.

Los distintos sectores políticos (demócratas, conservadores, radicales, católicos nacionalistas), como así también las propias Fuerzas Armadas, tenían distintas respuestas a estos interrogantes, y discrepancias de fondo para encauzar la vida institucional de la Nación.

Dado este estado de opiniones, la ruptura dentro del gobierno de Lonardi era previsible. El 13 de noviembre, un grupo de militares solicitó al presidente la remoción de algunas personas cuestionadas dentro de su gabinete, como Clemente Villada Achával, su cuñado, y Luis María de Pablo Pardo, ambos nacionalistas católicos.

La tensa reunión, que tuvo lugar en la residencia de Olivos, cul-

minó con la virtual destitución de Lonardi. Expresa el autor que "la falta de una renuncia escrita no impidió que el general Aramburu asumiera pocas horas más tarde como segundo presidente de la Revolución Libertadora". (p. 304)

Apoyado en el diario inédito del almirante Hartung, el historiador norteamericano describe los entretelones de la caída de Lonardi, como así también los hechos más significativos de la presidencia de Aramburu.

Importante es señalar la constitución de la Junta Consultiva, integrada por los partidos políticos no peronistas, presidida por el vicepresidente almirante Rojas, "actuó como caja de resonancia de los problemas políticos fundamentales que enfrentaba el gobierno de Aramburu". (p. 308)

Respecto al peronismo, se adoptó una posición clara y terminante: se declaró ilegal su accionar, prohibiéndose sus emblemas y cánticos partidarios, como así también la intervención de la C. G. T.; de esta forma se desmanteló todo su aparato político, para iniciar una "desperonización" del país.

El frustrado levantamiento peronista del 9 de junio de 1956, encabezado por el general de división (R) Juan José Valle, merece el siguiente juicio del autor: "por primera vez en el siglo XX, un gobierno ordenó ejecuciones al reprimir un conato de rebelión". (p. 316)

Inclusive, relaciona la dureza empleada por Aramburu, con su posterior ajusticiamiento en 1970, por un grupo de guerrilleros. Indica que la conducta brutal de éstos, debe algo al modo en que el gobierno de Aramburu, fruto a su vez de una revolución triunfante, trató a aquellos que se rebelaron en 1956.

A principios de 1957, se conoció el plan político del gobierno, con la convocatoria a elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, que procedería a reformar la Constitución Nacional; más tarde, elecciones generales para realizar la transferencia del poder a los civiles.

En esta etapa, Potash destaca la importancia que adquiere la figura del doctor Arturo Frondizi, quién trataba de capitalizar el descontento producido en las filas del peronismo. También señala la amistad del dirigente radical con Rogelio Friguero, economista y director del semanario "Qué", de abierta oposición al gobierno.

Al producirse la escisión radical, en la Convención partidaria realizada en Tucumán, el partido quedó dividido en dos fracciones: los sectores unionistas, balbinistas, sabatinistas y rabanalistas formaron la Unión Cívica Radical del Pueblo; los disidentes, la Unión Cívica Ra-

dical Intransigente. Líder de la primera será Ricardo Balbín, de la segunda, Arturo Frondizi.

Los comicios para integrar la Asamblea Constituyente, realizados el 28 de julio de 1957, demostraron a Frondizi y Friguero que "la campaña para lograr el apoyo de los votantes peronistas no había sido suficiente, era necesario llegar a un entendimiento con Juan Perón". (p. 345)

Basado en la correspondencia entre Perón y Cooke, su representante en la Argentina, como en las ya citadas memorias de Ferrén y Hartung, el autor analiza la puja electoral de 1958. Identifica a Ricardo Balbín como el candidato del oficialismo, y a Frondizi como el opositor a todo cuanto defendía la Revolución Libertadora.

Respecto al famoso pacto Perón—Frondizi, por el cual el primero decidió que sus simpatizantes votaran por el candidato de la U. C. R. L., sostiene que el mismo ha dado lugar a una serie de controversias, hasta hoy no superadas.

Opina que "el método más eficaz para resolver este problema sería que Friguero o alguna otra persona pudiera presentar el original del documento que él afirma haber enviado a Santo Domingo. Pero tal documento no ha aparecido nunca y el único texto disponible para el análisis es el que Perón distribuyó en 1959". (p. 361)

En la página 363, se reproducen los términos del acuerdo, firmado por Friguero, por el cual el líder justicialista se comprometía a dar instrucciones claras y precisas para que el voto peronista se otorgase a Frondizi. Este, a su vez, se obligaba a restablecer las conquistas logradas por el pueblo en lo político, social y económico.

La abrumadora mayoría obtenida por Frondizi en las elecciones del 23 de febrero de 1958, merecen la siguiente reflexión por parte del autor: "Frondizi asumía la presidencia con un doble riesgo: por un lado el agudizado recelo de los militares antiperonistas, casi tan disgustados por su propia incapacidad política como por el método de Frondizi para lograr el triunfo; por el otro, la determinación de Juan Domingo Perón de exigir el pago político total por los votos prestados". (p. 365)

El capítulo VIII (*La presidencia ensombrecida: Frondizi y los militares (1958—1961)*), analiza las relaciones entre el nuevo presidente constitucional y las Fuerzas Armadas. Atribuye a las mismas una vital importancia, ya que "del éxito de este esfuerzo dependería no sólo la supervivencia del gobierno del doctor Frondizi, sino también los futuros gobiernos constitucionales de la Argentina". (p. 366)

El autor considera al desarrollista Rogelio Friguero el artífice de

la política económica desplegada por Frondizi. La misma se basaba en la rápida expansión de la producción petrolera; con experiencia y capital extranjero, el país estaría en condiciones de lograr su autoabastecimiento en pocos años. Lograría así, reducir su dependencia de los combustibles importados, lo que significaría un ahorro estimado en 300 millones de dólares.

Este fue el origen de los "contratos petroleros", los cuales constituyeron un abierto desafío a los postulados fundamentales de los nacionalistas, despertando una intensa polémica en varios sectores de la opinión pública.

Respecto a los militares, Potash expresa que "recordando quizás las lamentables consecuencias de la intervención del presidente Yrigoyen en asuntos militares, Frondizi decidió seguir un rumbo opuesto, es decir, no interferir con sus ministros militares, satisfaciendo sus reclamos presupuestarios y dándoles mano libre en las decisiones acerca de su personal". (p. 386)

Sin embargo, esto no logró evitar los continuos roces ni cuestionamientos por parte de los secretarios de Ejército, Marina y Aeronáutica, lo cual fue deteriorando las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el presidente.

Esta situación alcanzó un clima muy especial, cuando Perón, desde su exilio en Santo Domingo, decidió dar a publicidad el pacto con Frondizi. Asegura el autor que "la revelación del documento intensificó forzosamente las presiones sobre Frondizi; aunque el negó terminantemente, como ya lo había hecho en el pasado, que hubiera llegado nunca a un acuerdo con Perón, y aunque aseguró que su firma en ese documento era falsa, debió ponerse a la defensiva". (p. 409)

Recrudescieron los intentos golpistas en las Fuerzas Armadas; a pesar que el presidente logró controlar la situación en la Marina y la Fuerza Aérea, no pudo hacer lo mismo en el Ejército.

En esta fuerza, la figura más importante fue su comandante en jefe, el general Carlos S. Toranzo Montero, de neta posición hostil al primer magistrado. Preconizaba una tarea de vigilancia sobre el gobierno, ya que consideraba a Frondizi muy proclive a sufrir presiones de los distintos sectores políticos, que lo desviarían del cumplimiento básico de los postulados y objetivos fundamentales de las Fuerzas Armadas.

A comienzos de 1961, Toranzo Montero intentó derrocar al gobierno constitucional. La causa desencadenante fue la política internacional de Frondizi acerca de la Cuba castrista. Conocida es la postura de la gestión frondizista de actuar como mediadora del conflicto de-

sencadenado entre este país y los Estados Unidos.

Este general consideró esta actitud como "una torcida gestión internacional que abría las compuertas al más crudo izquierdismo". (p. 441). Empero, el estallido golpista no prosperó. La plana mayor del Ejército, encabezada por el secretario de guerra, general (R) Rosendo Fraga, no aceptó la propuesta del comandante en jefe, decidiendo no reconocerlo como tal.

Como consecuencia de ello Toranzo Montero renunció a su cargo, con lo cual, transitoriamente, quedaba solucionada en el arma, la crisis desatada en marzo de 1961.

Al adelantar las causas del derrocamiento de Frondizi, el historiador norteamericano expresa que "el ejercicio independiente de su autoridad constitucional respecto de la política exterior provocaría agitación en las Fuerzas Armadas y abriría el camino para el final y funesto enfrentamiento de marzo de 1962". (p. 443)

En el capítulo IX (*Juegos peligrosos: la caída de Frondizi, 1961—1962*), Potash reseña los acontecimientos ocurridos en el último año de la gestión de Frondizi.

Considera que es en la conducción de las relaciones internacionales, donde se dieron los motivos principales de la destitución del presidente. El enfrentamiento entre éste y los militares, a raíz del enfoque dado a la política exterior, reconoce tres momentos claves: la firma del Tratado de Uruguayana, con su colega Janio Quadros; la entrevista secreta con el ministro de Industria de Cuba, Ernesto "Che" Guevara, realizada en Buenos Aires; y la actitud asumida por la delegación argentina en la Octava Reunión Consultiva de Cancilleres, efectuada en Punta del Este, para tratar el problema cubano.

En todos estos hechos, los militares se mostraron francamente adversos a la tónica impuesta por el gobierno, fundamentalmente por la postura asumida por el país en Punta del Este. En efecto, Argentina no se asoció a los Estados Unidos, y trece naciones más, que votaron por la expulsión de Cuba de la O. E. A.

Esto desató una ola de protestas y planteamientos por parte de las tres fuerzas, que culminaron con el forzoso decreto presidencial, por el cual el gobierno rompió relaciones diplomáticas con el régimen castrista. Expresa el autor que "la falta de franqueza del presidente en sus reuniones con los militares, sumada a la incapacidad de éstos para entender sus miras políticas, contribuyeron a impedir toda mejora de las relaciones entre ambas partes". (p. 467)

Lo apuntado anteriormente, unido al proceso electoral de mar-

zo de 1962, y sus resultados, fueron las causas determinantes de la destitución de Frondizi. Los comicios se llevaron a cabo el 18 de marzo; el peronismo se impuso en diez provincias, entre ellas la de Buenos Aires, cuyo candidato era el dirigente textil Andrés Framini.

Estima Potash que el presidente “había jugado su carta al tratar de anular a los peronistas como fuerza política mediante una derrota en las urnas y había perdido, la cuestión que ahora surgía era el precio político que debía pagar por este juicio de apreciación equivocado”. (p. 481)

Agotadas todas las posibles soluciones, las cuales son detalladas por el autor a base de los testimonios brindados por muchos de los que intervinieron en las arduas negociaciones, el 29 de marzo, Frondizi fue derrocado por el pronunciamiento unánime de las Fuerzas Armadas.

A modo de conclusión, expresa que “lo cierto es que Frondizi no tenía ahora otra opción que aceptar su destitución y tratar de salvar lo que podía para su partido, su programa, y su propio futuro político”. (p. 501)

En el capítulo X (*Epílogo*), el historiador norteamericano pasa revista, en forma muy sucinta, a los principales acontecimientos ocurridos hasta el pronunciamiento militar del 24 de marzo de 1976.

Considera que tanto civiles como militares, deberán encontrar, dentro del marco de las soluciones institucionales, la forma de impedir la alternancia de gobiernos constitucionales y “de facto”, con el propósito de obtener una prolongada estabilidad política, un desarrollo económico y una armonía social.

Para terminar, nos parece interesante y muy acertado reproducir el siguiente juicio del historiador Carlos Floria: “El trabajo entero de Potash sobre los hechos políticos e institucionales que protagonizaron los militares en nuestra historia contemporánea es el más fiel y mejor articulado que se haya escrito entre nosotros en clave histórica. Es, también, de lejos, el mejor documentado”.

Antibal Mario Romano

